## Paula Varela

# La disputa por la dignidad obrera

Sindicalismo de base fabril en la zona norte del Conurbano bonaerense 2003-2014





#### COLECCIÓN ARCHIVOS ESTUDIOS DE HISTORIA DEL MOVIMIENTO OBRERO Y LA IZQUIERDA Dirigida por Hernán Camarero

#### Paula Varela

La disputa por la dignidad obrera. Sindicalismo de base fabril en la zona norte del Conurbano bonaerense 2003-2014. 1a ed. Buenos Aires: 2015.

320 p.; 15x22 cm.

ISBN 978-950-793-192-5

1. Sindicalismo. 2. Movimiento Obrero. 3. Argentina

CDD 331.88

Fecha de catalogación: 08/01/2015

©2015, Paula Varela

©2015, Ediciones Imago Mundi

Foto de tapa: gentileza PTS

Hecho el depósito que marca la ley 11.723

Impreso en Argentina, tirada de esta edición: 700 ejemplares

Este libro se terminó de imprimir en el mes de abril de 2015 en Gráfica San Martín, Güiraldes 2723, San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo por escrito del editor.

# Índice general

entre la fábrica y el barrio Hernán Camarero
·
Agradecimientos
Introducción
I Crónica de un conflicto obrero
1 Del barrio a la fábrica
2 La gran explosión
II Jóvenes que se vuelven militantes de sus derechos
3 La expectativa de ciudadanía fabril 63
4 La «gran familia FATE»: la ilusión imposible 91
5 La debilidad de los punteros fabriles
6 La materia de la conciencia
III Sindicalismo de base
7 Nueva generación obrera
8 Las contradicciones y la izquierda
9 Los límites del territorio
Palabras finales
Potovoncias 267

# Capítulo 8

## Las contradicciones y la izquierda

«En la medida en que el liderazgo sindical no cumple el desempeño de las funciones sindicales, la contradicción entre capital y trabajo se desplaza hacia abajo en la jerarquía sindical, hasta la planta o taller, y entonces el delegado "usurpa" la función».

Anderson (1973)

La imagen de «usurpadores» podría expresar bastante bien lo que me transmitió, en el año 2013, un alto dirigente sindical del SMATA al hablar de la comisión interna de LEAR. Peronista de fuste, formador de dirigentes gremiales en la «conveniencia» de la conciliación de clases, sus hipótesis desplegaban los argumentos sobre la imposibilidad de la eternidad de la usurpación. Este acento en la inestabilidad de las direcciones clasistas a nivel de fábrica expresaba un deseo: que la Celeste¹ pierda la conducción de LEAR a como dé lugar,² y una verdad: el carácter específico (no infinito) de las condiciones sobre las que se despliega el sindicalismo de base y la intervención de la extrema izquierda en él. Para que esas condiciones adquieran nitidez, en este capítulo proponemos recorrer la década atendiendo el cru-

<sup>1.</sup> En noviembre de 2011, se llevan a cabo las elecciones de comisión interna en LEAR. La dirección del SMATA, cambia el sistema de votación (de voto por persona a voto por lista) para evitar que ganen algunos delegados independientes (como había sucedido previamente, dando como resultado una comisión interna «mixta», con oficialistas e independientes). Sin embargo, para sorpresa de la dirección del SMATA, con 310 votos sobre 249, gana la lista Celeste compuesta por Rubén Matu, Graciela «Chiky» Maidana, Gustavo Troccaioli, Silvio «Marley» Fonti, y Daniel Farías, el Paisa. Ellos serán los que en 2014 encabezarán la lucha por los despidos. Véase: http://learprimicias.blogspot.com.ar/2011/11/elecciones-2011-postula nte-lista.html

<sup>2.</sup> Para cumplir ese objetivo, la conducción del SMATA no ha escatimado esfuerzos (patotas, asambleas de destitución de delegados a «punta de despido», declaraciones exultantes en macartismo, etc.).

ce entre las modificaciones de las condiciones económicas, institucionales y políticas; la emergencia de nueva generación obrera; y el lugar de trabajo como espacio de politización en el que cobran peso militantes de la izquierda radical. Es en las contradicciones que produce este cruce que puede entenderse el surgimiento del sindicalismo de base y su peso específico en el proceso de revitalización sindical.

## El auge del «modelo»

Entre 2003 y 2006, se desarrolla lo que podríamos denominar el auge del «modelo», que combinó una rápida recuperación del nivel de actividad económica, un muy acelerado ritmo de creación de puestos de trabajo y el aumento del salario real. En el capítulo 1 hemos señalado algunos elementos de este primer momento del ciclo como contexto de surgimiento del conflicto en FATE. Aquí queremos retomar los rasgos que permiten analizar la dinámica del ciclo en su conjunto, señalando los puntos de inflexión que hacen a su periodización en cinco etapas: el auge, la meseta, el temblor, el alargue, la demonización.

Una primera cuestión interesante de este momento de auge es lo que respecta al crecimiento del empleo en la industria. Allí, Fernández Bugna y Porta (2007) señalan un dato importante para entender ciertos resortes de la conflictividad a nivel de lugar de trabajo que se disparan desde el inicio mismo del ciclo: el desfasaje entre crecimiento del empleo y crecimiento de horas trabajadas. Hasta mediados de 2003 hay un aumento de las horas trabajadas sin modificar el número de trabajadores; de allí en adelante, predominó la incorporación de nuevos puestos de trabajo, ampliando los planteles. Este doble movimiento hizo que entre 2002 y 2006, se observara un crecimiento de trabajadores empleados en la industria del orden del 29,7 %, al tiempo que un crecimiento de las horas trabajadas del orden del 39,4 %, en el mismo período. Es decir, que las horas trabajadas crecieron 10 puntos porcentuales más que el número de trabajadores incorporados. Esto se explica porque el aumento del empleo se combinó con un aumento en los niveles de explotación a través de la extensión de la jornada laboral (principalmente bajo el mecanismo de horas extras compulsivas), que repercute directamente en el sentimiento de «injusticia» que está a la base de la nueva militancia gremial en los lugares de trabajo.

En relación a los salarios, también se observa una dinámica que desmitifica la idea de que, de 2003 en adelante, asistimos a una política estatal de aumento salarial constante empujada por el ideal de distribución de la riqueza o de inclusión de los excluidos. Lo que se observa, más bien, es una fuerte política de regulación del salario real implicó una serie de mecanismos de arbitraje que combinaron la intervención gubernamental directa y las instancias de negociación colectiva y pacto social que dieron ingreso a los

sindicatos al centro de la escena. De 2002 (aun bajo el gobierno de Eduardo Duhalde) hasta 2004 el Poder Ejecutivo otorgó aumentos salariales de suma fija por decreto, arbitrando directamente entre capital y trabajo. Los aumentos de suma fija no remunerativos<sup>3</sup> propiciaron una mínima recuperación de la capacidad adquisitiva del salario que había caído en términos reales con la devaluación. A mediados de 2003, el gobierno de Kirchner propicia la primera instancia de «pacto social» a través de la regulación del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) cuyo monto se había mantenido congelado en \$ 200 desde 1993. El aumento otorgado es de \$ 50, llevando el SMVM a \$ 250, monto inferior al salario promedio incluso en los trabajadores no registrados. Es interesante observar que esta política de arbitraje directo por parte del Ejecutivo está relacionada con lo que podríamos denominar el «clima de incertidumbre» que el «modelo kirchnerista» aún generaba en el empresariado, motivo por el cual aparecía como una variable de «riesgo» librar las relaciones entre capital y trabajo a las negociaciones colectivas, aunque más no fuera en manos de la misma dirigencia sindical de los noventa. Por ende, en este primer momento se continúan las políticas signadas en 2002 como garantía estatal directa de la fuerte transferencia de recursos del trabajo hacia el capital que significó la salida de la convertibilidad.

El año 2004 marca el inicio del cambio de política del gobierno nacional respecto a los sindicatos, dando comienzo a la estrategia de relegitimación de las organizaciones sindicales a través, principalmente, de la figura de Hugo Moyano y la CGT. Este cambio encuentra su explicación en dos fenómenos: la consolidación del fuerte crecimiento económico (estabilización de las denominadas «tasas chinas») y el aumento de la conflictividad laboral, y como parte fundamental de este proceso, la emergencia del sindicalismo de base. Como dijimos en el capítulo 1 ya desde 2004 comienzan a observarse conflictos sindicales por empresa que presentan la característica de ser dirigidos por delegados gremiales de base en forma independiente o en abierta oposición a la conducción sindical. El cuerpo de delegados del subterráneo de Buenos Aires es quien inicia estos conflictos con su huelga de Semana Santa de 2004, inaugurando el primer momento de la conflictividad que durará hasta 2006 y estará signado por dos características. Demandas salariales que rompen el techo fijado por las direcciones sindicales, y reclamos por condiciones de trabajo y procesos de formación (o reconstrucción) de comisiones internas y/o cuerpos de delegados.

Es en este marco que debe analizarse la política de reunificación de la CGT y de relegitimación de los sindicatos en la figura de Hugo Moyano. El 14 de julio de 2004 (3 meses después de la primera huelga del subterráneo), se reúne el congreso general ordinario de la CGT y vota al líder camionero

<sup>3.</sup> A mediados de 2003, por decreto 392/03, se estableció que las sumas no remunerativas otorgadas serían incorporadas al básico mediante negociación colectiva posterior.

como secretario general. El 14 de julio de 2005, Moyano asume la conducción de la central sindical terminando el período transitorio de gobierno tripartito que compartía con Susana Rueda (Sanidad) referente de los denominados «gordos», y José Luis Lingieri (Obras Santiarias), perteneciente a los «independientes». De allí hasta 2011, Moyano será lo que los propios kirchneristas denominaron el «aliado estratégico» del gobierno nacional. Es decir que en sentido contrario de las interpretaciones que sostienen que el fortalecimiento de los sindicatos fue una política gubernamental implementada por generación espontánea, de arriba hacia abajo para garantizar el aumento de derechos laborales, la cronología muestra que el giro de una política de fuerte arbitraje gubernamental directo hacia una política de relegitimación de la institución sindical (en la figura de Hugo Moyano y la CGT) debe explicarse, en parte, por la presión que comienza a ejercer en 2004 el surgimiento de conflictos sindicales dirigidos por delegados de base que actúan por fuera (o en abierta oposición) a las cúpulas sindicales.

El «giro hacia los sindicatos» pudo observarse también en dos aspectos de la ley de Ordenamiento Laboral 25.877 que, en 2004, derogó la ley de Empleo Estable («ley banelco» 25.250): la restitución del principio de ultraactividad y de la prevalencia de negociaciones de ámbito mayor.<sup>4</sup> Ambas disposiciones fortalecían la gravitación de la CGT en la regulación de las condiciones salariales y de trabajo. Es a partir de esta necesidad de regular con más eficacia los reclamos salariales que las negociaciones colectivas pasan al centro de la escena y comienza la escalada ascendente de homologaciones. Durante 2005 se firmaron 568 acuerdos, un 63 % más que en 2004 (mientras que 2004 había presentado una leve disminución respecto de 2003) y en 2006 fueron avalados 930 convenios y acuerdos, la cifra más alta desde 1991. De allí hasta 2010, las negociaciones colectivas ofrecen cifras contundentes. Según los datos del Ministerio de Trabajo (MTEySS) la firma de negociaciones colectivas ha presentado una constante curva ascendente, acumulando un total de más de 7.000 unidades negociadas. <sup>5</sup> Esto establece un promedio anual de alrededor de 1.000 negociaciones colectivas, lo que quintuplica el promedio de menos de 200 unidades negociadas por año durante la década del noventa. Esto ha refractado, a su vez, en un aumento sistemático de la cantidad de trabajadores cubiertos por los convenios colectivos, los cua-

<sup>4.</sup> El principio de ultraactividad estipula que, ante la ausencia de nuevos convenios colectivos, es válido el último homologado. Este principio, que siempre se mantuvo en la letra, fue sin embargo modificado en la práctica durante la década del noventa. La prevalencia de negociaciones de ámbito mayor establece que un acuerdo o convenio firmado a nivel de rama, prevalece sobre un acuerdo o convenio firmado a nivel de empresa.

<sup>5.</sup> Véase, http://www.trabajo.gov.ar/left/estadisticas/negCol/index.as

les pasaron de 3 a 5 millones de asalariados entre 2003 y 2010 en el sector privado no agrícola.<sup>6</sup>

La centralidad de las negociaciones colectivas no eliminó, de ningún modo, el tutelaje presidencial directo. Por el contrario, la búsqueda de una regulación más eficaz de las negociaciones por salario dio como resultado la fórmula que signará el período: paritarias + topes salariales. El año 2006 inaugura las negociaciones paritarias con el tope del 19 % acordado entre la CGT, el gobierno y los empresarios, lo cual logra actuar como pauta de aumento salarial para el conjunto de los trabajadores registrados y descomprime los conflictos sectoriales y por empresa que habían comenzado en 2004. Es interesante señalar una cuestión respecto de 2006 para calibrar la importancia de los topes salariales en la política gubernamental. Este es el año en que los salarios de los trabajadores registrados alcanzaron los niveles previos a la devaluación. A partir de allí, la combinación entre aceleramiento inflacionario y regulación estatal del incremento del salario real, lograron que la tendencia promedio de los salarios reales sea al estancamiento en los niveles de 2001.

Eso explica uno de los principales desfasajes del período que hemos analizado en el capítulo 3 y que está relacionado (aunque no en forma lineal) con la conflictividad a nivel del lugar de trabajo: el desfasaje que se da entre un crecimiento que asume características históricas récord y un salario real que apenas recupera los niveles previos a la salida de la convertibilidad (es decir, niveles de piso histórico).

Sin embargo, la relativa calma respecto a la oleada de huelgas 2004/2005, se ve interrumpida por conflictos de los trabajadores precarizados. En abril de 2006, los tercerizados del petróleo de Las Heras (provincia de Santa Cruz), junto a los efectivos que reclamaban contra el impuesto a las ganancias, protagonizan una revuelta local por el encuadramiento sindical. El reclamo de los tercerizados consiste en pasar de la Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina (UOCRA), al Sindicato Unidos Petroleros del Estado (SUPE). Al mismo tiempo, en la ciudad de Buenos Aires se movilizaban los inmigrantes bolivianos denunciando la superexplotación en los talleres textiles que había cobrado la vida de 6 trabajadores, 4 de ellos niños. La incorporación de los tercerizados a los reclamos gremiales había tenido sus antecedentes en 2005. En octubre de ese año, nuevamente el subte vuelve a escena esta vez de la mano de los trabajadores de la tercerizada Metropolitano que reclaman el pase a convenio de la UTA. La medida se inicia con los

<sup>6.</sup> Las estadística del MTEySS, no contabilizan las negociaciones colectivas del sector docente como así tampoco de la administración pública nacional.

<sup>7.</sup> Un año después, en 2007, esos niveles serán alcanzados por el promedio de los trabajadores aunque con una fuerte heterogeneidad interna.

<sup>8.</sup> Esta masacre fue producto del incendio de un taller textil en Caballito en el que los inmigrantes bolivianos estaban encerrados bajo llave en calidad de esclavos.

precarizados tirándose a las vías. Tras el intento de desalojo por parte de la Policía Federal, los trabajadores de Metrovías paralizan el subterráneo y salen en defensa de los tercerizados: comienza la lucha por el pase a convenio de UTA. Durante 2005 y especialmente 2006 el encuadramiento sindical de los trabajadores será uno de los principales motivos de conflicto en el subte.

Por su parte, los trabajadores de la empresa Catering World (contratista de limpieza en el Ferrocarril Metropolitano – ex Roca –) cortan las vías para ser incorporados como ferroviarios bajo convenio de la Unión Ferrioviaria (UF). Los ferroviarios agrupados en la lista de oposición a la dirección del sindicato nacional encabezado por Pedraza, realizan cortes de vía y bloqueos de boleterías en solidaridad con los tercerizados. En lo que fue un primer «round» del conflicto, logran erradicar las tercerizadas del Ferrocarril Metropolitano, aunque los trabajadores fueron convencionados por el Sindicato de Empleados de Comercio (SEC) y no por la UF. En 2006 comenzaron esa batalla.

En el sector telefónico, los tercerizado de Atento (*call center* parte del grupo Telefónica Argentina) comienzan a exigir el pase al convenio de FOETRA, y más tarde, comienzan a organizarse los denominados «contratas», empresas de instalación y reparación de líneas telefónicas que fueron tercerizadas en el proceso de privatización de ENTEL. Tanto en ferroviarios como en subte se logró el pase a convenio del conjunto de trabajadores mientras que en telefónicos de FOETRA no.

Durante el mismo 2006 comienzan a verse procesos de lucha y organización en el sector de los trabajadores industriales concentrados en el Conurbano bonaerense. A diferencia de los conflictos en los servicios, en la industria son de muy baja visibilidad social y política debido a que suelen quedar encerrados en la propia planta fabril o, en caso de un conflicto duro, impactar solo a nivel del territorio local. Obtuvieron algún grado de visibilidad (zonal o nacional) aquellos conflictos que incorporaron, dentro de sus medidas de protesta, el corte de ruta o de autopista. Excepto estos casos, los conflictos industriales suelen quedar reducidos a los márgenes de sus lugares de trabajo por lo que es dable pensar que ha habido otros procesos de conflicto en fábricas de los que no tenemos conocimiento. De allí que, parte de lo que va a ir incorporándose como rasgo distintivo de la conflictividad industrial de la zona norte sean los cortes de la Panamericana. No obstante, en este primer momento del ciclo, sería impreciso hablar de una oleada de huelgas a nivel de la industria. Lo que sí se observó es una mayor actividad y lucha obrera por fábricas, tanto por reivindicaciones salariales como por conquistar nuevas organizaciones y delegados de base.

En la zona oeste, los obreros de The Value Brand Co. – ex Jabón Federal – en el corazón de La Matanza, comienzan en 2006 un fuerte conflicto que dura más de 50 días con piquetes y carpa en la puerta de ingreso a la planta, en defensa de la organización sindical de base y contra la dirección del sindi-

cato jabonero. Los petroleros de la empresa Pride en Rincón de los Sauces (Neuquén) salen al paro por fuera de la dirección sindical. Los obreros de la UOCRA de Siderar en San Nicolás se movilizan y eligen nuevos delegados. A su vez, comienzan los conflictos en la textil Pagoda y Fibracentro de San Luis.

En 2007 un hecho modificó el escenario de las luchas de asalariados: el 9 de abril de 2007 fue asesinado por la policía provincial el docente Carlos Fuentealba durante una protesta en la ruta 22 en la provincia de Neuquén. Esta protesta se da en el marco de importantes huelgas de docentes entre las que se destacan las de la provincia de Salta y Santa Cruz. Ante la envergadura del conflicto, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) – que agrupa a la mayor cantidad de docentes en el país – llama al primer paro nacional docente bajo el kirhcnerismo.

Algunas de las luchas de la industria surgieron incentivadas por este clima. Los marineros de la pesca en Puerto Deseado, que habían expulsado a la dirección del Sindicato de Obreros Marítimos Unidos (SOMU), de la delegación local ya en 2005, salieron a una lucha dura con guema de galpones de las empresas. Los petroleros de la contratista Empasa de Caleta Olivia cortaron la ruta ante la llegada de un contingente de militantes kirchneristas a un acto oficialista. En Mar del Plata, los fileteros reclaman por condiciones de trabajo y se enfrentan a la dirección del sindicato, llegando a tomar su sede (luego fueron reprimidos). En Rosario, los trabajadores del Lavadero Industrial Virasoro comienzan una lucha que implica despidos y la instalación de carpas frente a la planta. En La Plata los obreros de Mafissa reclaman aumento salarial y mejora de las condiciones de trabajo, y también reciben decenas de despidos. En estos últimos dos casos, son plantas industriales en las que hay un fuerte activismo y nuevas comisiones internas enfrentadas a la dirección sindical. Otra característica de estas luchas es que muchas de ellas fueron reprimidas.

En el cordón industrial que va de la zona norte del Conurbano hasta Santa Fe, comienzan las luchas de los trabajadores de las industrias químicas de Campana-Zárate y de Cerámica Alberdi. Como habíamos visto en el caso de la represión de los aeronáuticos de Lafsa en la que el cuerpo de delegados de subte realizó un paro solidario de media hora, los trabajadores de la Papelera de Zárate pararon en solidaridad con los huelguistas de las químicas de su misma ciudad. A diferencia del caso anterior, el paro fue completamente espontáneo, ni los delegados ni el sindicato cumplieron ningún papel. En la misma zona, comienza la huelga de Sintermetal Campana – encuadrada en la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) – por fuera de la dirigencia sindical. La mayor parte de los activistas, muchas de ellas mujeres, fueron despedidos.

#### La meseta

Entre 2007 y 2008 algunas de estas condiciones del crecimiento económico se modifican, y comienzan a aparecer los primeros síntomas de agotamiento del «modelo». El primero de ellos es una inflación creciente<sup>9</sup> (empujada por el aumento de los precios internacionales de las commodities y el crecimiento de la demanda interna, en una economía con expansión limitada de la oferta). Entre diciembre de 2005 y el mismo mes de 2006 la inflación había alcanzado el 9,9 %, mientras que entre ese mes y diciembre de 2007 alcanzó el 25,8 % (L. Campos 2009). Esto alteró la diferencia entre el tipo de cambio nominal (aproximadamente 3 a 1) y el tipo de cambio real, lo que comenzó a indicar una revaluación del peso en términos reales. En este contexto, los sectores productores de bienes que venían encabezando el crecimiento económico, comenzaron a frenar relativamente la producción. Hacia fines de 2007, la producción industrial había alcanzado su máximo (medido en cantidades) y a partir de allí comenzó a disminuir (hasta que repunta a fines de 2009).

Esto tuvo un impacto directo en el mercado de trabajo y en la recuperación del salario real. En términos de creación del empleo global se produjo un amesetamiento, que puede observarse en el crecimiento de 0,5 % que se observó en la ocupación urbana entre el segundo trimestre de 2007 y el mismo período de 2008 (ibíd.). En términos generales el ritmo de creación de empleo, que había sido de 18 % en el primer trienio, cae a un tercio en el trienio siguiente.<sup>10</sup>

En términos de salario, en 2007 se profundiza la política de topes salariales (fijado ese año en 16,5 %) lo que implicó por primera vez un estancamiento del poder adquisitivo de los trabajadores. <sup>11</sup> Esto marcará el surgimiento de una nueva política de arbitraje presidencial directo en la regulación salarial: la intervención del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (IN-DEC) lo que obstaculiza, entre otros cálculos, el de la inflación y por ende del salario real en Argentina.

Desde el punto de vista de los conflictos obreros, el principio de agotamiento del «modelo» de crecimiento puede verse básicamente en dos fenómenos: el endurecimiento de los empresarios a la hora de negociar y en el papel de las direcciones sindicales ante el surgimiento de sectores de trabajadores que no acatan a la dirección o incluso la enfrentan. Caso emblemá-

<sup>9.</sup> Como señalan Noda y Mercatante (2005), desde 2005 comenzaron a verse tendencias inflacionarias en el «modelo», pero es 2007 el año en que estas pegan un salto.

<sup>10.</sup> De hecho, en el trienio 2010-2013, el ritmo cae a un quinto en comparación con el momento de auge. Véase Lindenboim (2013, pág. 42). En 2013 la creación de empleo se frena y en 2014 comienza directamente a decrecer. Véase CIFRA (2014).

<sup>11.</sup> Como señala en VVAA (2013), para los trabajadores estatales de 2007 en adelante comienza una caída constante de su salario real.

tico de esto último es el del Casino Flotante de Buenos Aires, cuya comisión interna (opositora al SOMU) encabezó un muy duro conflicto, en el que fueron reprimidos 6 veces por Prefectura y tuvieron que enfrentar, además de a la patronal, el insólito caso de seis direcciones sindicales (correspondiente a los seis sindicatos que operan en el casino) que se declararon en contra de la huelga y medidas de fuerza de los trabajadores, y que, además de amenazas y amedrentamiento a los activistas del conflicto, justificaron los despidos dejando a los trabajadores sin ninguna cobertura gremial. Otros casos que expresan el cambio en la conflictividad laboral fueron el intento de desafuero del delegado de subte Néstor Segovia y la ofensiva de la dirección de la UTA contra al cuerpo de delegados de este en su conjunto; el ataque por parte de una patota de la UTA a los delegados y activistas de la línea 60; el ataque de la patota de la UOM a los obreros de la autopartista Dana Spicer (ex Eaton) en la zona norte del Conurbano; y la muy dura lucha de los obreros de Mafissa (ex Hilandería Olmos) en el Gran La Plata, que luego de acampar frente a la planta en protesta por los despidos, tomaron la fábrica y fueron desalojados por un operativo policial de más de 700 efectivos para una toma realizada por 18 obreros.

#### El temblor

Entre fines de 2008 y mediados de 2009 la dinámica entre negociación colectiva y conflictividad laboral se modifica por una serie de factores políticos y económicos. El escenario local de desaceleración de la producción en ciertas ramas, amesetamiento de la creación de empleo y freno del salario real, es el que encuentra la crisis económica internacional. Al igual que en el resto de Latinoamérica, las correas de transmisión de la crisis en nuestro país están relacionadas con el comercio exterior. Hacia septiembre de 2008 hubo una caída relativa de los precios de los productos que Argentina exporta y la reducción de la demanda de nuestras exportaciones (particularmente las manufacturas), a lo que se sumó la seguía que afectó los saldos exportables. Además, entre agosto y diciembre de 2008, tanto Brasil, México como Chile devaluaron su moneda, acentuando la apreciación relativa del peso argentino que había comenzado en 2007.12 Por su parte, la crisis produjo una reversión del flujo de capitales hacia los países centrales lo que afectó la inversión extranjera directa y el acceso al crédito en el país. A esto se agregó la transmisión de la crisis vía las transnacionales cuyas casas matrices recortaron gastos y redujeron las plantillas de trabajadores en las filiales locales (como el caso de las automotrices).

En definitiva, el impacto de la crisis en Argentina profundizó los síntomas de agotamiento del «modelo» económico que habían comenzado a

<sup>12.</sup> Desde fines de 2008 en adelante comienza en Argentina una devaluación por goteo. Véase Arceo, E. Basualdo y González (2010).

expresarse un año antes: caída del producto, mayor merma de la actividad industrial contando entre los sectores más afectados a la industria automotriz, la caída del comercio exterior (tanto exportaciones como importaciones) y el pasaje del amesetamiento en la creación de empleo a su contracción. Entre fines de 2008 y mediados de 2009 se estima que se perdieron 350.000 puestos de trabajo.¹³ Como señala el informe del CENDA, «focalizando la atención en el mercado de trabajo podemos apreciar que incluso los poco confiables datos publicados por el INDEC muestran un incremento en la tasa de desocupación a partir del segundo trimestre de 2009. De acuerdo con la última información disponible, la tasa de desocupación había sido del 7,8 % sobre la Población Económicamente Activa (PEA) en el tercer trimestre de 2008 y alcanzó el 9,1 % en el mismo trimestre de este año [2009]. En lo que respecta a la tasa de subocupación, también se observa un aumento, ya que llegó al 10,6 % de la PEA en el tercer trimestre de 2009, cuando había sido del 9,2 % en el mismo trimestre de 2008» (CENDA 2009, pág. 5).

A nivel político, la crisis del gobierno de Cristina Fernández luego del denominado «conflicto del campo», derivó en la derrota electoral de 2009. En este tercer momento el eje de los conflictos por fábrica pasa a ser por despidos o suspensiones, como se observa en la lucha de los trabajadores precarizados de la fábrica de camiones IVECO y de la fábrica Gestamp en la provincia de Córdoba; las tomas de fábrica contra los cierres en las metalúrgicas Paraná Metal y Mahle, la papelera Massuh, la gráfica Indugraf; la manifestación por fuera de la dirección sindical de alrededor de 700 obreros de la fábrica Tenaris en Campana; el plan de lucha de la UOM con paros nacionales y movilizaciones en las que se manifestaron las fábricas medianas y chicas en contra de las direcciones sindicales, entre otros conflictos. En FATE, la empresa comienza una política de ataque a la nueva dirección gremial de la fábrica a través del despido, en 2008, de 80 trabajadores de la planta y el inicio de causas penales a varios delegados sindicales. En 2009, las medidas se concentran contra delegados de la fábrica y miembros de la seccional San Fernando: el intento de desafuero del delegado Victor Ottoboni, la suspensión (por dos días) del delegado Sosa, el intento de suspensión

<sup>13.</sup> Este cálculo incorpora trabajadores registrados, no registrados y trabajadores por cuenta propia. Como señalan los investigadores del CENDA, «Si se considera que en crisis anteriores (la crisis del Tequila, la crisis final de la convertibilidad) los puestos no asalariados y los de asalariados no registrados se vieron reducidos con mayor intensidad que los de los asalariados registrados, la caída actual sería incluso mayor que la estimada. Además, debe tenerse en cuenta que la información sobre puestos de trabajo asalariados registrados que se toma como punto de partida para estos cálculos no comprende la totalidad de los asalariados de la administración pública, lo que también implica un cierto nivel de subestimación de los totales presentados». Véase CENDA (2009).

(por quince días) de Maximiliano Bronzuoli, y el juicio por despido de Marcelo Gallardo.

El año 2009 también resulta un año sumamente ilustrativo respecto de la función que juega el tope salarial impuesto por el gobierno en acuerdo con la dirección moyanista. Por primera vez desde el retorno de las negociaciones colectivas, el gobierno nacional no establece una pauta de aumento salarial. Esto se explica porque, en una coyuntura recesiva, la negociación «libre» redunda en beneficio de los empresarios en la medida en que se ajusta a la evolución de la producción y del poder de los sindicatos. Entre 2008 y 2009 solo cuatro ramas de actividad de la industria manufacturera presentaron crecimiento, lo que hizo que la mayoría de las patronales argumentara la imposibilidad de subir salarios y blandiera la amenaza de despidos o suspensiones como recursos de negociación a la baja.

En esta coyuntura emergió quien se constituiría en el referente del sindicalismo de base a nivel industrial: la comisión interna de Kraft Foods. A partir del despido de 156 trabajadores, la mayoría de ellos activistas sindicales que habían puesto en pie el cuerpo de delegados, se desarrolla desde agosto de 2009 un proceso en la planta de General Pacheco que duró casi 4 meses, incluyó un paro total de 38 días, innumerables cortes de Panamericana, ocupación de la planta fabril y desalojo violento con la infantería. El conflicto ocupó durante semanas los medios masivos de comunicación y obligó a la intervención de la COPAL – la cámara empresaria que agrupa a las principales industrias de la alimentación – el gobierno nacional e incluso de la embajada estadounidense para su resolución (además, por supuesto, de la cúpula de la CGT en la figura de su secretario general). La envergadura del conflicto logró, además, la solidaridad de organizaciones territoriales y estudiantiles de izquierda que realizaron diversos cortes y manifestaciones en el Conurbano bonaerense y en la CABA. En octubre de 2009 el diario *Crí*tica de la Argentina afirmaba: «El conflicto en la alimentaria Kraft puso sobre la superficie una tendencia que surgió en forma aislada en el último lustro y que hizo eclosión este año. Se trata de los delegados y las comisiones internas de fábricas y activistas que funcionan al margen de los sindicatos reconocidos alineados con la CGT. Y que disputan sus propias reivindicaciones incluso cuando los gremios ya dieron por clausuradas las negociaciones formales. El fenómeno no reconoce límites geográficos ni de rubros de la economía, y es una de las principales preocupaciones del gobierno y de los empresarios».14

Si uno observa el conflicto de Kraft encuentra una serie de elementos sumamente interesantes para reflexionar respecto de la repolitización fa-

<sup>14.</sup> Martín (2009). El conflicto de Kraft al que hace referencia el artículo periodístico, fue el primer conflicto obrero industrial que cobró envergadura política nacional. Para análisis del conflicto de Kraft, véase Varela y Lotito 2009; Lotito y Ros 2010 y Cambiasso 2013.

bril en general, y su importancia dentro del proceso de revitalización sindical en Argentina. El primero es el disparador del conflicto. A contramano de lo que pasaba con otras industrias como la metalmecánica, (que se vio afectada por los rebotes de la crisis internacional en el país y encabezó la serie de despidos y suspensiones mencionados más arriba), la industria de la alimentación fue una de las cuatro ramas que no solo no mostró recesión durante 2008 y 2009, sino que mostró claro crecimiento. Esto obliga a buscar las causas de los 156 despidos en otro lugar. Si uno mira la composición de los obreros y obreras despedidos encuentra que su mayoría habían sido los activistas sindicales que pusieron en pie del cuerpo de delegados de la planta fabril durante 2007 y 2008. De allí que la mayoría de los despedidos se hayan concentrado en el turno noche, el más organizado y con más activismo de la planta. Estos datos, refuerzan la hipótesis (sostenida por los propios activistas contra el discurso de la empresa) que el ataque de Kraft Foods tuvo como motivo central el intento de desarticular el proceso de organización de base en la planta de Pacheco. En este sentido, este conflicto muestra cierta continuidad con lo que comenzó en 2007 como política gubernamental de ataques selectivos a organizaciones de base. Pero la prolongación y dureza del conflicto (acorde a la resistencia que opusieron los trabajadores) hizo que el caso de Kraft se transforme en un gran debate público sobre la organización sindical en el lugar de trabajo, sus tensiones con las direcciones de los sindicatos y la existencia de la izquierda clasista. Durante más de un mes los medios masivos de comunicación volvieron pública la existencia de dirigentes de izquierda opositores a la conducción nacional del gremio en manos de Rodolfo Daer. Esto hizo que la pregunta por quién conduce la comisión interna de Kraft, trascendiera las fronteras de la fábrica y se transformara en una pregunta de interés político, logrando un hecho inédito: la cobertura por parte de los medios masivos de las elecciones de la comisión interna de la planta de Pacheco y la televisación del triunfo del ala izquierda encabezada por Javier «Poke» Hermosilla, militante del Partido de Trabajadores Socialistas (PTS). Aunque el conflicto había sido «cerrado» formalmente unas semanas antes con la firma de un acta en el Ministerio de Trabajo, la división que se produce entre los delegados de la comisión interna entre el sector (mayoritario) encabezado por Ramón Bogado que decide firmar<sup>15</sup> y Hermosilla que se niega, produce que el conflicto se desplace (y se resuelva finalmemtne) en el terreno de las elecciones internas. El apoyo mayoritario de los obreros a la lista Bordó presentada por Hermosilla y un sector del activismo fabril, cerró efectivamente el conflicto y abrió una nueva etapa en la planta fabril volviendo a Kraft en referente del sindicalismo de base.

<sup>15.</sup> Originariamente Ramón Bogado decide no firmar el acta pero luego se retracta de esa decisión sumándose al sector mayoritario que había firmado y diferenciándose de Hermosilla que había decidido no firmar.

Este conflicto mostró tres cosas:

- 1. que el sindicalismo de base, cuya conflictividad había sido aplacada hacia 2006, continuó extendiéndose en forma molecular en los lugares de trabajo;
- que ese «movimiento» que se había constituido en el período 2004-2006 como expresión de la lucha por la ruptura del techo salarial, podía convertirse, en «época de crisis», en obstáculo de aplicación de ajustes;
- que hubo un desplazamiento del centro de gravedad del sindicalismo de base desde los servicios hacia la industria y que, en ese movimiento, la zona norte del Conurbano se transformaba en el teatro de operación privilegiado de ese proceso.

En cierto modo, el conflicto de Kraft hizo público (también en el debate académico) los contornos del sindicalismo de base y de la nueva generación obrera que nosotros habíamos encontrado dos años antes en FATE, cuando los trazos de ese proceso recién estaban delinéandose.

## El alargue

La segunda mitad de 2009, presentó un punto de inflexión respecto del impacto de la crisis en el país. En el último trimestre comenzó a observarse una recuperación y expansión de la producción a tasas elevadas. Se calcula que para el primer trimestre de 2010 la tasa de crecimiento interanual del PBI es del 6,8 %, consecuencia de lo cual, la tasa de empleo también volvió a incrementarse. Pero este nuevo crecimiento presentó una particularidad: mientras el crecimiento del producto alcanzó niveles superiores a los previos a la crisis (es decir, superiores a los de fines de 2008), el crecimiento del empleo alcanzó prácticamente los mismos niveles que en el primer trimestre de 2008. Esto señala un desfasaje entre crecimiento del producto y crecimiento del empleo aún mayor que el que señaláramos para 2007, momento en que comienza a agotarse el «modelo». Si miramos especialmente el empleo en el sector productor de bienes, encontramos que esta brecha es muy superior a la media. En la industria manufacturera los asalariados registrados se redujeron 5,4 %, aun cuando el nivel de producto aumentó 7 %. 16 En

<sup>16.</sup> Los investigadores del CENDA analizan este desfasaje haciendo hincapié en la poca fiabilidad de las cifras y en el corrimiento de la creación de empleo desde los sectores productores de bienes (hasta 2007) hacia los sectores de servicios y fundamentalmente la administración pública a partir del impacto de la crisis. Si bien consideramos que esos elementos son parte de la explicación del desfasaje entre producto y empleo, creemos que el factor fundamental es el aumento de la productividad que permite explicar crecimiento del producto en la industria a niveles del 7 %, y decrecimiento del empleo en 5,4 %. Véase CENDA (2010).

diversos sectores industriales en los que se observaron despidos entre fines de 2008 y principios de 2009, a partir de fines de 2009 se observó un aumento de la producción en cantidad (incluso en niveles mayores a los previos) sin la reincorporación correspondiente de los porcentajes de los trabajadores despedidos. Esto implicó, en términos de condiciones de trabajo para los asalariados, un nuevo incremento de los ritmos de producción y de tareas (que afecta directamente al uso productivo de la fuerza de trabajo), la extensión de la jornada laboral (que afecta directamente las condiciones de compra venta) y también el empleo rotativo (por contrato o tercerizado) para cubrir necesidades puntuales de producción (que afecta, directamente, la conflictividad por crisis).

A partir de esta situación puede comprenderse algo que se observa en los informes de conflictividad laboral del Observatorio del Derecho Social de la CTA (ODS): el hecho de que, pese a la recuperación económica (posimpacto de la crisis internacional), los conflictos encabezados por las llamadas demandas por «crisis» (despidos, suspensiones, adeudamiento de salarios) no solo no decrecen sino que se mantienen en el primer lugar desde 2008 hasta la actualidad, superando a los conflictos encabezados por demandas salariales. La otra demanda que también comienza a crecer y termina desplazando a un tercer lugar a la demanda salarial es la de «condiciones de trabajo». El aumento de los conflictos por «crisis» y por «condiciones de trabajo» está relacionado, con dos movimientos. Uno de coyuntura: el golpe de la crisis internacional que hace que aumenten las demandas, particularmente, por despidos. Este escenario, como se observa en las bases de datos tanto del Ministerio de Trabajo como del ODS, no provocó un aumento de la conflictividad laboral a nivel de rama o nacional.<sup>17</sup> Esto es interesante porque indica, al menos parcialmente, que la tendencia de las federaciones, uniones y centrales sindicales fue a una actitud de pasividad ante el cambio de la coyuntura, dejando librado al lugar de trabajo (y su particular relación de fuerzas) la resistencia ante los despidos o suspensiones (principales medidas con que las empresas trasladaron el costo de la crisis a la fuerza de trabajo). El fuerte aumento en las demandas por «crisis» que se observa en la base del ODS está directamente relacionado con esta coyuntura que se desarrolla a nivel del lugar de trabajo. Este empuje a los conflictos por «crisis» y por «condiciones de trabajo» a nivel de empresa, empalma con un movimiento que no es de coyuntura sino que signa el período de conjunto que es el aumento de actividad conflictual y gremial a nivel del lugar de trabajo, actividad que combina demandas salariales, por condiciones de trabajo y por la organización gremial de base.

<sup>17.</sup> De hecho, la conflictividad a nivel de rama se mantiene relativamente estable durante todo el período, mientras que a nivel de empresas señala un aumento creciente y más marcado aún desde 2010 en adelante. Estas tendencias se observan tanto en la base del Ministerio de Trabajo como la del ODS.

En lo que a salario se refiere, recuperación de la economía mediante, a principios de 2010 retorna la puja por aumento salarial y con ella, los topes salariales fijados por el gobierno, la CGT y el empresariado. La única rama que firma un aumento 10 puntos por encima del tope del 25 % es la alimentación, debido al conflicto con paro y corte de Panamericana encabezado por la comisión interna de Kraft. De allí en adelante, las comisiones internas opositoras en el gremio alimenticio irán creciendo. Al respecto, es interesante lo que declaró Daniel Funes de Rioja, representante de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL): «Ambos sectores (cámara empresaria y cámara de sindicatos alimenticios) representan a los productores y a los gremios de todas las empresas de alimentos y bebidas, y se debaten hace años en acuerdos de aumentos salariales importantes para frenar las embestidas de las comisiones internas de izquierda dura que pueblan las grandes compañías del rubro». 18 Hacia 2012 esta «izquierda dura» conformará la lista Bordó a nivel nacional y obtendrá casi el 40 % de los votos del gremio.

El año 2010 termina con un hecho que sacudió la escena nacional: una patota de la Unión Ferroviaria asesina al militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra en medio de una jornada de lucha de los tercerizados del ferrocarril ex Roca. <sup>19</sup> El asesinato puso en evidencia tres elementos que venían expresándose en la conflictividad laboral pero estaban invisibilizados en los medios y debate público: la lucha de los tercerizados, la connivencia entre niveles del Estado y la burocracia sindical y la utilización de patotas sindicales como herramienta de disciplinamiento y represión para-estatal. <sup>20</sup>

Entre 2010 y 2011, las luchas a nivel de fábrica se amesetan aunque empiezan a perfilarse conflictos que combinan elementos de ajuste de las empresas (salarios adeudados, suspensiones, despidos a trabajadores «rotos», etc.) con los elementos de disciplinamiento a activistas y comisiones inter-

<sup>18.</sup> Ámbito Financiero, 7 de febrero de 2013.

<sup>19.</sup> Para una reconstrucción del asesinato de Mariano Ferreyra, véase la investigación periodística de Rojas (2011).

<sup>20.</sup> Parte de la querella (la Dra. María del Carmen Verdú de la CORREPI) sostuvo que la Policía Federal y la Policía Bonaerense habían liberado la zona y que existió complicidad estatal-gubernamental en los hechos. Dentro de los condenados, hay cinco miembros de las fuerzas de seguridad por las figuras de «partícipe necesario», «incumplimiento de los deberes de funcionario público» y «omisión de deberes de funcionario público». Durante el proceso de investigación del asesinato de Mariano Ferreyra se hicieron públicas grabaciones de una conversación telefónica de enero de 2011 (unos meses después del asesinato) entre el ministro de Trabajo, Carlos Tomada y el dirigente de la UF, José Pedraza. Si bien no fue llevado a juicio ningún funcionario civil del Estado, esas conversaciones han sido interpretadas como lo que impidió la candidatura de Carlos Tomadas en las elecciones de 2011. Pedraza fue declarado «partícipe necesario» del asesinato y condenado a quince años de prisión. Para un análisis del fallo, véase Zorzoli (2014).

nas opositoras que venían configurándose anteriormente (procesamiento a delegados, despidos selectivos, amedrentamiento). Durante el 2011 se observan los conflictos en el frigorífico Paty (con fuerte hostigamiento a los delegados), la metalúrgica Mecca Castelar (con despidos y suspensiones), la gráfica Donnelley (con despidos) y los primeros rasgos de conflictividad en la autopartista LEAR. Además, aparece un nuevo foco de conflictos de trabajadores en la zona norte: el Parque Industrial de Pilar (caracterizado previamente como un sector de muy baja conflictividad laboral). También en ese año se produce un hecho relevante que marcará el ciclo de conflictividad laboral general: el crecimiento exponencial de los conflictos estatales, especialmente a nivel provincial y municipal. Estos conflictos están relacionados con la aparición de crisis fiscales en las provincias, de cuyos presupuestos dependen los servicios de educación y de salud (además de las administraciones públicas provinciales y municipales).

#### La demonización

Fines del año 2011 y principios de 2012 marcan el comienzo de un nuevo punto de inflexión en la política gubernamental hacia los sindicatos, signado por un arbitraje directo mucho más marcado y por el inicio de la reversión de la estrategia de relegitimación de los sindicatos como institución del régimen político posdevaluación. Esto puede observarse a través de diversas variables. En relación a la homologación de las negociaciones colectivas y según el último informe anual disponible en el MTEySS, la tendencia progresiva comienza a revertirse y se observa un descenso de 8,5 % respecto del año anterior. Según los datos del primer trimestre de 2012, la tendencia a la baja se profundiza descendiendo en un 28 % la cantidad de homologaciones respecto del mismo período del año anterior. Este cambio de política por parte del gobierno tiene dos explicaciones principales: la aceleración de la inflación (y el intento gubernamental de frenar los aumentos salariales) y la ruptura del gobierno de Cristina Fernández con Hugo Moyano (y el intento gubernamental abierto de quitar poder de negociación a los sindicatos).

En cuanto a la inflación, el año 2011 marcó el inicio de un aceleramiento que continúa hasta la actualidad. El aumento progresivo del índice inflacionario hacia 2011 alcanzó poco menos del 25 % anual, en 2012 superó el 25 %, y en los primeros meses de 2013 se transformó en el centro del debate político en el país al haber acumulado solo en el mes de enero, alrededor de 2,6 %. El 2013 cierra con una inflación que superó el 30 %. El reconocimiento oficial de estas cifras inflacionarias fue la devaluación del peso en enero de 2014, que llegó al 23 % durante ese mes (aminorando luego y volviendo a subir después) y que significó un baja de salario real de alrededor de 7 % (CIFRA 2014).

Este aumento de la inflación es la expresión más visible (junto con el déficit en las cuentas fiscales) del agotamiento del «modelo» más en general que se manifestó en una caída del crecimiento del PBI desde 8,9 % en 2011 a 1,8/1,9 % en 2012. Es en este contexto que se dan los primeros roces y posterior ruptura del gobierno de Cristina Fernández con su «aliado estratégico», Hugo Moyano. Los motivos inmediatos de la ruptura hay que buscarlos en el desequilibrio entre el lugar de Moyano (y con él de un sector de la dirigencia sindical peronista) dentro del régimen kirchnerista y el lugar de este mismo sector dentro del Partido Justicialista. Es decir, un desfasaje entre el peso social y político que alcanzaron los sindicatos en la postconvertibilidad, y su peso político dentro del partido de gobierno, 21 y por ende, en las negociaciones por la sucesión gubernamental. Este desequilibrio estalló bajo la forma de la lucha por las candidaturas electorales al interior del FPV. Las elecciones de 2011 significaron una derrota para el sector sindical y un triunfo relativo del sector territorial del PJ, lo que dejó cierta tensión entre el moyanismo y el gobierno nacional. Esa tensión se transformó en ruptura inmediatamente después de las elecciones de octubre de 2011. Cristina Fernández, bajo el supuesto de su sustento en el 54 % de los votos, comenzó a enarbolar un discurso de fuerte descalificación hacia los reclamos obreros y con ellos hacia los sindicatos. Para 2012 la ruptura estaba consumada y con ella se conformaba un escenario sindical atípico en el país: la existencia de 5 centrales sindicales, 3 de ellas opositoras, y 2 oficialistas.<sup>22</sup> El pasaje de Hugo Moyano a la oposición aceleró el cambio de política del gobierno nacional respecto de los sindicatos y de los reclamos salariales en su conjunto, profundizando el arbitraje presidencial directo. La negativa del Ministerio de Trabajo a la homologación de convenios y acuerdos que comienza en 2011 y se profundiza en 2012, es una forma de ejercer el arbitraje gubernamental directo

<sup>21.</sup> Sería un error pensar este desfasaje en clave politicista y atribuirlo a una voluntad antisindical o antiobrera por parte del cristinismo (sin negar que esos elementos estén presentes). Como venimos describiendo existen elementos estructurales que están en su base. Para un análisis particular del gremio de camioneros y su relación con el gobierno kirchnerista, véase Fernández Milmanda (2012) y Pontoni (2013).

<sup>22.</sup> El lock out de las patronales agrarias y la polarización política y crisis del gobierno que produjo, redundó en dos rupturas dentro del movimiento sindical. La ruptura de la CTA entre un ala abiertamente oficialista conducida por Hugo Yasky (docentes), y un ala opositora ligada al Frente Amplio Progresista (FAP), conducida por Pablo Micheli. Esta ruptura se terminará de definir en 2010 en oportunidad de las elecciones generales de la central en la que ambas fracciones se acusarán de fraude, mientras el Ministerio de Trabajo dará el triunfo al ala yaskista. A su vez, el «conflicto del campo» también producirá el fraccionamiento de un sector minoritario de la CGT encabezado por Luis Barrionuevo (gastronómico) y Momo Venegas (peones rurales) que conformarán la CGT Azul y Blanca, en disconformidad con la alineación de Moyano con el gobierno nacional durante el conflicto.

ante la evidencia de pérdida de capacidad para pactar topes salariales con las direcciones sindicales divididas y con un sector importante en la oposición. En este contexto, el 20 de noviembre de 2012, la cúpula de la CGT y la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) opositoras, convocan a un paro general. Pese a que había habido dos paros generales previos (como medidas de repudio ante el asesinato del docente Carlos Fuentealba el 9 de abril de 2007 y el asesinato del militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra el 20 de octubre de 2010, y con un componente más de movilización que de paro efectivo), el 20 de noviembre de 2012 puede considerarse como el primer paro general convocado por reclamos sindicales (salario, impuesto a las ganancias y asignación universal por hijo) bajo un gobierno kirchnerista. El acatamiento es superior a lo esperado por las propias direcciones sindicales mostrándose un alto grado de ausentismo, incluso en aquellos gremios oficialistas que no convocaban a la medida de fuerza.

Otro elemento que en 2012 pone en evidencia el cambio de política del gobierno respecto de los sindicatos y de los trabajadores (hacia una política de demonización de luchas y organización) es la reacción gubernamental ante la denuncia iniciada por parte de la abogada del CEPRODH Myriam Bregman y avalada por distintos organismos de derechos humanos y asociaciones de abogados, de la existencia del denominado Proyecto X, una base de datos de Gendarmería (la fuerza elegida por el gobierno kirchnerista para mejorar la imagen de las instituciones represivas ante el desprestigio de la «maldita policía» y de las fuerzas armadas) construida a partir de la infiltración (de civil) en manifestaciones y el espionaje ilegal a dirigentes sindicales de izquierda de la zona norte (como Javier «Poke» Hermosilla de Kraft) a partir de la cual se les iniciaba causa por cortes de ruta y otras figuras legales. La denuncia de Proyecto X (cuyo centro de operaciones residía en el emblemático Campo de Mayo) significó un hecho importante para el análisis del peso de las luchas obreras y del sindicalismo de base en Argentina: fue la primera crisis de la política de seguridad del gobierno nacional (determinante en el desplazamiento de la ministra Nilda Garré) y de uno de los discursos pilares del kirchnerismo: la no represión a la protesta social. Es el sindicalismo de base y la influencia de la izquierda en él, quien comienza a perforar uno de estos discursos pilares.

El año 2013 comienza con un hecho que refuerza el cambio de política gubernamental respecto de los sindicatos: ante el reclamo de los docentes por un aumento salarial del 30 % (monto aproximado de la proyección de la inflación para 2013), el gobierno nacional cierra unilateralmente la paritaria a través de un decreto que establece un aumento del 22 %. En el sector privado, los conflictos comienzan a estar signados claramente por características de crisis (muchas veces aprovechadas por las empresas para «sacarse los trabajadores conflictivos»). Una serie de despidos (o bajas de contrato

como modalidad de despidos encubiertos) desatan conflictos en la metalúrgica Liliana, en Kraft, LEAR y General Motors Rosario.

El año termina con un fallo inédito en lo relativo a la criminalización de la protesta social, al que Osvaldo Bayer se refirió como «un nuevo Sacco y Vanzetti»: la condena a cadena perpetua a los trabajadores petroleros de Las Heras<sup>23</sup> por una causa iniciada (y con notorias pruebas de fragua) por el asesinato del policía Sayago durante una movilización de los petroleros (con fuerte apoyo popular) en 2006.

En 2014 se profundizará la doble tendencia de conflictos por despidos y cierres y de respuesta represiva por parte del gobierno nacional, instalando lo que serán luchas claves de la zona norte del Conurbano: la de la autopartista Gestamp²⁴ que en el mes de abril inaugura la lucha contra los despidos con la toma del «puente grúa» de la planta fabril en el que permanecerán subidos nueve obreros durante cinco días; la de los trabajadores de Emfer y TATSA que cortan la General Paz (a la altura de Tecnópolis) y enfrentan a la Gendarmería para denunciar el vaciamiento que el grupo Cirigliano realiza de la planta de trenes y colectivos y solicitar la estatización ante un escenario de posible cierre de la empresa; la gráfica Donnelley que en agosto cierra las puertas de la planta (dejando 400 trabajadores desempleados) a partir de lo cual los obreros toman la fábrica y la ponen a producir solicitando la expropiación y estatización bajo gestión obrera (siguiendo el ejemplo de Zanón en Neuquén) y la lucha de la autopartista LEAR que se transformará en el principal conflicto obrero del año, sobre el que volveremos más adelante.

### La izquierda clasista

Dijimos en el capítulo 7 que uno de los rasgos que caracteriza este sindicalismo de base es que está constituido por jóvenes entre 25 y 35 años, lo que denominamos «la generación 2001». Y dijimos también que las jornadas de diciembre de 2001 combinaron la puesta en crisis del conjunto de las instituciones del Estado con la legitimación parcial de la acción directa como herramienta de lucha y aspectos de democracia directa plasmados en el asambleísmo. Pero el 2001 no es solo crisis del Estado, saqueos, lucha callejera y repudio a las instituciones de la democracia neoliberal, es también la presencia de la «extrema izquierda» o «izquierda clasista» en los principales fenómenos de la lucha de clases y organización popular. Es decir, la

<sup>23.</sup> Pese a que nunca pudo probarse de dónde provino el proyectil que causó la muerte a Sayago en medio de una movilización multitudinaria, los trabajadores fueron condenados en una causa repleta de irregularidades. Para una descripción, véase Marín (2014).

<sup>24.</sup> Véase la entrevista realizada por Mario Santucho y Martín Rodríguez a Roberto «Robi» Amador del PTS en «Los nietos de fierro», revista *Crisis*, núm. 20, septiembre 2014; o «Las vaquitas son ajenas», en *Ideas de Izquierda*, núm. 11, julio de 2014.

«generación 2001» se desarrolla en un clima de época en que la izquierda que se reivindica revolucionaria es parte, minoritaria pero existente, del tablero político del país a través de su inserción en las luchas sociales de la última década y media. Esa inserción de la izquierda clasista es también parte constituyente del sindicalismo de base actual cuyo núcleo duro, a nivel de la industria manufacturera, se encuentra en la zona norte del Conurbano, con el PTS como principal referencia.

Si bien es de extrema dificultad la medición estadística de la influencia de la izquierda en el movimiento obrero, una serie de estudios permiten cierto acercamiento al fenómeno. En el ámbito académico se encuentran diferentes investigaciones de caso sobre las ramas de la alimentación, subterráneos, salud, automotrices, neumáticos, etc. en los que la presencia de la izquierda en el sindicalismo combativo o de base se señala con mayor o menor profundidad (véase Cotarelo 2007; Montes Cató y Ventrici 2011; Lenguita 2011; Guevara 2012; Duhalde 2012; Cambiasso 2013 y Longo 2014). Por otra parte, es también interesante analizar los datos del Observatorio del Derecho Social de la CTA que, en su medición de la conflictividad laboral, destacan una variable que no es medida en otras bases de datos: conflictos laborales que fueron conducidos en ausencia de representantes sindicales o en confrontación con ellos. Si bien esta «categoría» no es idéntica a «presencia de la izquierda», en la práctica tienden a coincidir. Si se miran los datos de 2007, se encuentra que un 14 % de los conflictos laborales son conducidos por direcciones no reconocidas institucionalmente u opositoras a la dirección sindical. Si se mira los datos de 2010 este porcentaje ha aumentado al 17%. Si estos datos se cruzan con el crecimiento (ya mencionado) de la conflictividad en el lugar de trabajo, sector en el que se afinca el crecimiento de la izquierda, va obteniéndose un cuadro de esta influencia. Periodísticamente, de 2005 en adelante se encuentran una serie de notas de coyuntura que resaltan el fenómeno, así como también dossiers dedicados a problematizar la existencia del «sindicalismo indomable». En cuanto a los materiales militantes es posible realizar un seguimiento a partir de los periódicos partidarios<sup>25</sup> que permiten observar también la desigual influencia que cada partido tiene en el movimiento obrero a través de la enumeración de la conducción y/o participación en comisiones internas y/o cuerpos de delegados, y conducción y/o participación en listas opositoras en distintos gremios. Por último, esta presencia de la izquierda en la conformación del sindicalismo de base se observa también en la protesta callejera y la emergencia de referentes sindicales con pública militancia partidaria.

Una fecha clave en el carácter público que asume la influencia de la izquierda en el movimiento obrero, es el año 2009. El ya nombrado conflicto

<sup>25.</sup> Véase La verdad obrera (PTS), Prensa Obrera (PO), El Socialista (IS), Socialismo o Barbarie (Nuevo MAS), entre otros.

de Kraft significó un punto de inflexión en este sentido, logrando la televisación a nivel de todo el país de la existencia de un ala de extrema izquierda en la comisión interna encabezada por Javier «Poke» Hermosilla (del PTS).

El año 2012 introdujo un cambio de escala para el sindicalismo de base y la izquierda. Dos elementos explican esta modificación: la consumación de la ruptura entre el gobierno nacional y Hugo Moyano y el paro nacional del 20 de noviembre que mostró un acatamiento superior a lo esperado por las propias cúpulas sindicales, incluso en sectores en los que dirige la burocracia oficialista. A esto se suma un elemento de carácter político-electoral que es la conformación de Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT), integrado por el PO, el PTS e IS que en 2011 logra superar en las PASO, el piso requerido por la ley electoral para presentarse en las elecciones nacionales, y obtiene dos legisladores provinciales (Neuquén y Córdoba). La constitución del FIT y su visibilidad en la escena electoral, produjo un fortalecimiento de la extrema izquierda en el ámbito sindical. Este cambio de escala para el sindicalismo de base se expresó en sectores con conducciones de izquierda que «saltaron las fronteras de las fábricas» y disputaron sindicatos a nivel nacional o provincial. Este es el caso de las elecciones en la Federación Gráfica Bonaerense en abril de 2012, en la que la lista Naranja-Bordó obtuvo un 29 % de los votos, llegando al 40 % en la zona norte del GBA. En mayo se realizaron las elecciones del gremio de la Alimentación en el que la lista Bordó obtuvo un 36 % de los votos, logrando la mayoría en 14 fábricas. En el mes de junio se realizaron las elecciones en el gremio jabonero y la lista Bordó obtuvo un 37 % en las urnas de Capital y GBA.<sup>26</sup>

El paro del 20 de noviembre de 2012, constituye también otra fecha importante en la medida en que mostró a este sindicalismo de base y la influencia de la izquierda en él a escala nacional a través de la televisación de los piquetes que el jefe de Gabinete llamó «piquetes extorsivos» y Cristina Fernández descalificó por no ser los «piquetes del hambre». Desde las 6 am, la televisión ofrecía como imágenes del paro los cortes en Panamericana a la altura de Henry Ford (zona norte del GBA), con dirigentes como Lorena Gentile (de la comisión interna de Kraft) o Eduardo Ayala (de la comisión interna de Donnelley), ambos miembros del PTS, encabezando el corte de una serie de internas fabriles dirigidas o con influencia de la izquierda: Kraft, Pepsico, Stani, FATE, Frigorífico Rioplatense, docentes de SUTEBA y colectiveros de la línea 60. Más tarde se sumó la columna más numerosa (200 trabajadores), la de los gráficos de la zona, encabezada por Donnelley, Word Color y Printpack. En el ferrocarril Sarmiento, cuyo dirigente es Ru-

<sup>26.</sup> Nosotros nos concentramos en la industria, pero hacia fin de año se realizaron las elecciones de ATEN (docentes de la provincia de Neuquén) donde el FURA (frente opositor a la conducción yaskista) ganó la seccional provincial. En octubre se realizaron las elecciones del sindicato aeronáutico (APA), en las que la opositora lista 2 «Desde las Bases» obtuvo el 30 % de los votos en aeroparque Jorge Newbery.

bén «Pollo» Sobrero, militante de Izquierda Socialista, hubo cortes de vía desde el inicio de la jornada; y en el subterráneo de Buenos Aires, hubo enfrentamientos con la patota de la UTA en la línea B cuyo referente es Claudio Dellecarbonara, militante del PTS. Durante el día y por la noche en los programas periodísticos, las pantallas estaban partidas entre los dirigentes de las centrales convocantes (Moyano, Micheli y Barrionuevo) y los dirigentes del sindicalismo «combativo» o «de izquierda» que protagonizaron la jornada en la calle.<sup>27</sup>

El año 2013 comienza con el triunfo de las listas de izquierda en muchas de las principales seccionales de SUTEBA: La Matanza (el distrito con más afiliados), La Plata, Quilmes, Ensenada, Berazategui, entre otras. El especialista de gremiales del diario Clarín, Ricardo Carpena, señalaba: «Ganó, pero perdió. Así podría sintetizarse el resultado de las elecciones de anteayer en SUTEBA, el principal sindicato docente de la provincia de Buenos Aires, en las que su titular, el kirchnerista Roberto Baradel, obtuvo la reelección por un 70 % de los votos, pero el dato político más novedoso e impactante fue el fuerte avance del sindicalismo combativo: la única lista de oposición, en donde estuvo representada toda la izquierda (del Partido Obrero al PTS, pasando por el MST, el PCR e Izquierda Socialista), se impuso en 11 de las 32 seccionales en que se presentó». 28 Hacia fin de año, el resultado de un millón doscientos mil votos que obtiene el FIT<sup>29</sup> (un caudal electoral inédito para un frente de izquierda trotskista en el país), que le otorgó diputados y legisladores en Buenos Aires, CABA, Mendoza y Salta (sumados a los de Córdoba y Neuquén obtenidos en 2011), vuelve más visible la relación entre izquierda y sindicalismo de base por la política expresa de dar apoyo activo desde las bancas legislativas hacia los conflictos obreros. El ejemplo más visible de esto se verá durante el conflicto de LEAR en el año 2014.

El 2014 comienza con un paro docente que se extiende a 17 días en la provincia de Buenos Aires por presión de los SUTEBAs opositores. El 10 de abril, las centrales opositoras (CGT Moyano, CGT Barrionuevo, CTA Micheli) convocan a un nuevo paro general que, a diferencia del de un año y medio antes (20 de noviembre de 2012), obtiene la adhesión de la UTA, lo que hace que la huelga sea más masiva que la anterior y que en muchos lugares de trabajo en los que el gremio no adhería a la medida, el paro se llevara a cabo de todas formas por el ausentismo (ejemplo de eso fue la fábrica Ford que quedó paralizada por falta de personal y la VW que apenas pudo producir,

<sup>27.</sup> Sobrero participó de la mesa de la conferencia de prensa que dio la CGT una vez finalizado el paro, lo que fue criticado por otros sectores de la izquierda.

<sup>28.</sup> Véase, «El avance de la izquierda en las elecciones de SUTEBA», Clarín, 24 de mayo de 2013, resaltado del autor.

<sup>29.</sup> Para un análisis del resultado electoral del FIT en 2013 en comparación con las elecciones del fin de ciclo alfonsinista y con las de la crisis del menemismo, véase Varela y Collado (2013).

ambas dirigidas por la lista Verde del SMATA, uno de los principales aliados del gobierno nacional). El 10 de abril, vuelve a ponerse de manifiesto (y con más fuerza que el anterior) la presencia de la izquierda en el movimiento obrero y la zona norte del Conurbano bonaerense y su principal arteria, la Panamericana, como teatro de operaciones del sindicalismo de base industrial. La jornada comienza con la Panamericana cortada por las comisiones internas opositoras a la altura de Henry Ford (el Parque Industrial de Pilar también queda paralizado por piquetes en sus accesos). A diferencia del 20 de noviembre de 2012, la Gendarmería reprime, intenta desalojar con balas de goma y lleva detenido a Jorge Medina, delegado de la gráfica Donnelley. Los manifestantes vuelven a cortar la ruta, la tensión con la Gendarmería dura alrededor de 5 horas. Hacia el mediodía, los manifestantes liberan la Panamericana. El editorialista de La Nación, Carlos Pagni, lo resumía en su editorial del 11/04 diciendo: «El Frente de Izquierda y de los Trabajadores, que ha tenido una llamativa evolución electoral, cercó ayer la ciudad de Buenos Aires con sus piquetes: un modo de diferenciarse de los "burócratas" Moyano y Barrionuevo. Capitanich aprovechó esa modalidad para identificar la huelga con un gran corte de tránsito. Pretendió inflamar a la clase media, a la que tal vez enfade más con otras declaraciones. El Partido de los Trabajadores Socialistas (PTS) y el Partido Obrero hicieron notar ayer el cese de actividad en numerosas plantas de la zona norte donde el trotskismo, en especial el PTS, controla las comisiones internas. La insistencia pretende resaltar que Caló (metalúrgicos), Daer (alimentación) o Pignanelli (mecánicos) fueron desobedecidos».30

Un dato interesante de la jornada fue el cambio de discurso de la CGT moyanista respecto de los piquetes encabezados por la izquierda. Durante los días previos (en que ya habían anunciado los cortes), los dirigentes de la CGT se diferenciaron de la «metodología» y criticaron a la izquierda. Al final de la jornada, en la conferencia de prensa otorgada en la sede de la CGT, Juan Carlos Schmidt (secretario general del Sindicato de Dragado y Balizamiento), se refiere a «los compañeros de izquierda» a los que reconoce un crecimiento tanto «territorial» como en «esos los lugares descuidados por las dirigencias sindicales», en referencia a las fábricas. Luego del paro general, el 2014 en la zona norte, estará signado por conflictos ligados a la recesión económica y el aprovechamiento de las empresas de esta situación para «sacarse» a los delegados y activistas combativos. Ejemplo de esto es el conflicto de la autopartista LEAR, que el anuario de *El Cronista Comercial* definió como *el conflicto empresarial del año*, <sup>31</sup> a partir de recoger la opinión

<sup>30.</sup> Véase, «La puja que amenaza el sueño de Cristina», *La Nación*, 11 de abril de 2014.

<sup>31.</sup> Véase «El reclamo que ganó por cansancio», edición 106 aniversario *El Cronista*. Visión de los líderes 2015. Más de 500 CEOs de las empresas top de la Argentina, 5 de diciembre 2014.

de los principales CEOs del país. El conflicto se desata en el mes de mayo cuando la empresa suspende por tiempo indefinido a 330 trabajadores (la mitad del total de la planta), de los cuales alrededor de 200 pasan a ser despidos de hecho ante la ausencia de información por parte de la empresa respecto de la fecha de su vuelta al trabajo. De allí en adelante comienza un conflicto que durará más de 6 meses e implicará 15 «Jornadas Nacionales» (denominadas así por los obreros) que significaron 14 cortes de Panamericana y acciones de solidaridad en Puente Pueyrredón, Córdoba, Rosario, Neuquén y Mendoza; alrededor de 6 represiones por parte de Gendarmería que dejaron un saldo total de 22 detenidos y más de 80 heridos; 5 cortes en el Obelisco; 10 marchas al Ministerio de Trabajo, la Cámara de Comercio v la Embajada estadounidense; 15 bloqueos en la puerta de la fábrica (colectora) con piquetes y actos; 12 días de lock out por parte de la empresa LEAR; 2 asambleas organizadas (a la fuerza) por parte del SMATA para destituir a los delegados de izquierda; más de 1 millón de pesos de fondo de huelga logrado a través de una campaña que llegó a universidades, lugares de trabajo y escuelas de distintos lados del país; 57 números del Boletín de Lucha<sup>32</sup> de LEAR, y un Encuentro Nacional convocado por Donnelley y LEAR. En el terreno legal, el conflicto implicó 12 fallos judiciales a favor de la reinstalación de los obreros, una demanda penal contra Ricardo Pignanelli, secretario general del SMATA, (por la realización de la asamblea ilegal de destitución de delegados) y contra la Gendarmería por las represiones y por la infiltración de oficiales de civil entre los manifestantes. El 16 de diciembre, la Sala X de la Cámara de Apelaciones del Trabajo emite un fallo que revierte los fallos adversos en primera instancia (que habían rechazado las cautelares) y ordena (por primera vez) una «reincorporación colectiva» argumentando la ilegalidad de realizar despidos masivos sin la correspondiente presentación del PPC (Procedimiento Preventivo de Crisis). El lunes 22 de diciembre los obreros se hacen presentes en la fábrica y la empresa se compromete a su reincorporación a partir del 19 de enero (luego de las vacaciones de verano). Así encuentra (al momento de terminar este libro) el principal conflicto del año.

Si bien no vamos a analizar aquí la complejidad del caso LEAR, sí queremos resaltar que este carácter de «conflicto del año» responde a que expresó, de manera concentrada, muchas de las contradicciones que hemos tratado de enumerar y analizar a lo largo del libro. En primer lugar, la expectativa de ciudadanía fabril, que se manifestó en la resistencia de más de 6 meses de los trabajadores ante los despidos masivos. Si uno de las columnas vertebrales del «retorno de los sindicatos» del kirchnerismo fue la fuerte recuperación del empleo, los despidos masivos realizados por LEAR en mayo operaron

<sup>32.</sup> Estos 57 números pueden encontrarse en: http://issuu.com/boletindelucha/docs.

quebrando ese «sentido común» del derecho al trabajo y generando una resistencia que implicó, además de decenas de asambleas obreras, el uso de la acción directa (con altos grados de creatividad como las caravanas de autos en la Panamericana para poder realizar un corte de hecho evitando la represión) como herramienta legítima de lucha por los derechos, acción directa en la que no solo participaron los obreros de LEAR sino también otras comisiones internas, centros de estudiantes, partidos de izquierda y otras organizaciones solidarias. En segundo lugar, la expresa influencia de la izquierda en la comisión interna como parte central del proceso de configuración de la lucha. 33 Esta presencia, que ganó peso en LEAR en 2011 a través del triunfo de la lista Celeste de oposición a la Verde del SMATA y cuyo emblema fue (al igual que en el FATE de 2007-2008 y en otras fábricas de la zona) la asamblea como órgano de decisión y la acción directa como herramienta de lucha, se potenció en el conflicto de 2014 a través de la irrupción de un nuevo elemento que multiplicará el carácter público de la relación entre izguierda y sindicalismo de base: la presencia de los diputados del FIT en los cortes de Panamericana y los enfrentamientos con la Gendarmería, en los que cobró especial protagonismo Nicolás del Caño (diputado del PTS por la provincia de Mendoza). Esta relación entre lucha obrera y las posiciones parlamentarias conquistadas en las elecciones de 2013 por el FIT, terminaron de consolidar públicamente la existencia de un ala de izquierda en el movimiento obrero y, en cierto modo, operaron legalizándola (y por ende, volviéndola una referencia política claramente identificable) ante un público masivo que siguió el conflicto de LEAR por los medios de comunicación. En tercer lugar, el conflicto permitió observar el giro hacia la demonización de las luchas obreras y de abierta política de criminalización y represión de la protesta social que encabezará el gobierno kirchnerista a través de la figura de Sergio Berni, expropiando uno de los pilares de su discurso construido alrededor de «no reprimir la protesta social». Esto generará una serie de crisis y reacciones en los sectores progresistas del kirchnerismo. En la Cámara de Diputados de la Nación el bloque kirchnerista repudió la represión sufrida por el diputado Nicolás del Caño en la Panamericana; en la Legislatura de la provincia de Buenos Aires, a instancias del diputado provincial Christian Castillo se votó por unanimidad una declaración de «preocupación» por la situación en LEAR y se hicieron presentes en la puerta de la fábrica los diputados kirchneristas Fernando «Chino» Navarro, Miguel Funes, Patricia Cubría y Juan José Mussi; el Centro de Estudios Legales y Sociales, CELS, dirigido por Horacio Verbitsky se presentó en la causa contra los despidos en LEAR como amicus curiae a favor de los trabajadores, denunciando la irregularidad de los despidos por parte de la empresa sin previo Procedimien-

<sup>33.</sup> Durante el conflicto se hará pública la influencia del PTS en la comisión interna y en el sector de activistas denominados luego «los indomables».

to Preventivo de Crisis. Estas grietas en el ala progresista del kirchnerismo se profundizará ante la denuncia de lo que se conoció como «el gendarme carancho», para referirse al intento por parte del Gendarme Torales de inculpar a un manifestante que participaba de una caravana en apoyo a los obreros de LEAR, tirándose sobre el capot de su automóvil y deteniéndolo luego bajo la acusación a haberlo atropellado y el «infiltrado Galeano», 34 ex gendarme pasado a retiro, que comandaba los operativos de la Panamericana infiltrándose en la manifestación vestido de civil. Estas denuncias del accionar de la Gendarmería, sumado a las reiteradas represiones con balas de goma (incumpliendo el denominado «protocolo Garré» de actuación en casos de manifestaciones) y especialmente la represión del 23 de octubre que dejó 50 manifestantes heridos y 13 hospitalizados, hicieron que el 5 de noviembre de 2014 la jueza federal de San Isidro, Sandra Arroyo Salgado solicitara, a través de un fallo, el retiro de la Gendarmería de las inmediaciones de la fábrica LEAR y estableciera que la resolución del conflicto le correspondía al Ministerio de Trabajo. En cuarto lugar, el conflicto dejó en evidencia la actuación pro-empresaria del Ministerio de Trabajo a través de dos hechos relevantes: la «permisividad» con la multinacional al reconocer de hecho la legalidad de los despidos sin que la empresa haya presentado Procedimiento Preventivo de Crisis,<sup>35</sup> y el aval legal de una asamblea de destitución de los delegados opositores realizada por la dirección del SMATA sin cumplir con los procedimientos legales y estatutarios para su convocatoria (asam-

<sup>34.</sup> La identificación de Galeano como ex gendarme fue realizada por el CELS a partir del material fílmico de TVPTS.

<sup>35.</sup> Como señala el abogado Edgardo Moyano: «Tres son los pilares fundamentales de la estabilidad del empleo en el derecho laboral argentino. Uno de ellos es el caso de los Delegados Sindicales, a quienes se inviste de una tutela que impide al empleador despedir sin la tramitación de un procedimiento previo, en ese caso judicial. Otro es el caso de los empleados administrativos por el tipo de estabilidad que gozan. Y otro sustancial es el Procedimiento Preventivo de Crisis, que busca evitar que las empresas realicen despidos masivos discrecionalmente. En estas tres situaciones la solución que establece la ley, ante casos de incumplimiento, es la invalidez de las suspensiones o despidos, su nulidad. En el caso LEAR, la empresa desobedeció lo establecido en la legislación vigente en materia de preservación del empleo "colectivo" en la Argentina y hasta el momento el Ministerio de Trabajo lo ha dejado correr, "dinamitando" uno de los principales "diques de contención" legal frente a despidos masivos, con las consecuencias que ello implica, lo que convierte al "caso LEAR" en un conflicto testigo»; «Caso LEAR: vía libre a las empresas para despedir masivamente», La izquierda a diario, 27 de noviembre de 2014. Al respecto el CELS señala, «Este procedimiento preventivo de crisis no es opcional para el empleador sino que, muy por el contrario, resulta ser una obligación ineludible cada vez que se configuran los supuestos legales que lo habilitan, y el Estado, a través de sus órganos, en tanto medida de cumplimiento de las obligaciones internacionales, debiera asumir».

blea que, luego, tuvo que ser desconocida de hecho por las presentaciones legales realizadas por los trabajadores y sobre todo por la insistencia de los cortes y movilizaciones). Por último, la ubicación de la dirección del SMA-TA de Pignanelli que puso de manifiesto (de un modo que ni una caricatura podría superar) la política de expreso enfrentamiento de la burocracia con la comisión interna combativa de la planta (con escenas de macartismo explícito), y su actuación como aparato de represión y disciplinamiento de los trabajadores.

Si bien aún está pendiente una investigación detallada sobre el peso relativo de cada partido de la izquierda clasista en el movimiento obrero, y de las diferencias de estrategias políticas que se manifiestan en las prácticas al interior del sindicalismo de base, es indudable que no puede entenderse este fenómeno de «revitalización sindical desde abajo» sin colocar en el centro de la escena el papel de los activistas y militantes de izquierda en el *locus* de organización fabril. El retorno de la disputa por la dignidad obrera tiene, por ende, pinceladas de una extrema izquierda que cobra peso en un escenario de repolitización fabril signado por la asincronía entre acumulación y participación.

#### **Incertidumbres**

En una entrevista realizada en octubre de 2011 (pocos días antes del triunfo electoral de Cristina Fernández), Juan Carlos Torre diferenciaba un «peronismo contingente de un peronismo permanente» y afirmaba que los sindicatos son parte fundamental del «alma permanente» del peronismo. Meses después se consumaba la ruptura de Cristina Fernández con Hugo Moyano. Y se consumaba también un cierto desconcierto en sectores del kirchnerismo que defendían la alianza estratégica con el camionero, y en sectores de la academia que, desde una perspectiva estatalista, sostenían la tesis de «retorno de un gigante» como pilar de la política gubernamental del «modelo kirchnerista».

Como hemos desarrollado, dicha ruptura no responde a una contingencia sino que expresa una contradicción constituyente del régimen kirchnerista: la contradicción entre la fuerte recomposición social de los trabajadores (alentada por las variables de la acumulación postconvertibilidad) y el mantenimiento de las condiciones de explotación neoliberales (sobre las que se basa dicha acumulación). Señalar esto no significa decir que la ruptura era necesaria en la forma y en los tiempos en que se dio. La política tiene su relativa autonomía (y, en este caso, sus relativos caprichos). Significa sí poner la atención en la contradicción estructural que dicha ruptura pone de manifiesto con la perspectiva de establecer hipótesis que expliquen el pasado reciente, al tiempo que permitan anticipar tendencias a futuro. El retorno de los sindicatos al centro de la escena política nacional, lejos de

una restitución del pasado, contiene las tensiones entre la herencia de los noventa, la impronta de las jornadas de 2001 y la nueva fuerza que los asalariados asumieron de 2003 en adelante, fuerza entre la que se cuenta la presencia de la izquierda.

El sindicalismo de base, invisibilizado en las perspectivas «estatalistas», conjuga esos tres elementos y lo hace recuperando una tradición que signó al sindicalismo argentino del siglo xx: la organización sindical de base en el lugar de trabajo. De allí que sea insoslayable a la hora de analizar el nuevo protagonismo sindical. Pero además pone de manifiesto un elemento también subvaluado en las investigaciones académicas dominantes: el papel de la «extrema izquierda» en el movimiento obrero.

En 1973, en la presentación de un ya clásico Cuaderno de Pasado y Presente, los editores decían lo siguiente: «Vistas las cosas desde este ángulo, cobra importancia la noción de estrategia sindical y se vuelve más fructifero plantearse la cuestión en estos términos: ¿cómo forzar la inercia de las instituciones sindicales y formular una plataforma reivindicativa que unifique aquello que la división capitalista del trabajo divide y separa?» (1973: IX). Cuarenta años después esa pregunta resulta, quizás, más actual que entonces. La profunda precarización de la clase obrera heredada de los noventa, es parte central de lo que «la inercia de las instituciones sindicales» mantiene y la política de las cúpulas garantiza. El sindicalismo de base surge sobre las bases de esa hiperprecarización. La pregunta por los modos en que esta nueva generación obrera puede reconstruir los lazos entre efectivos y precarios, en negro y en blanco, sindicalizados y no sindicalizados, e incluso, ocupados y desocupados, es la pregunta central para debatir la estrategia política (ya no sindical) de la izquierda clasista hacia los sindicatos en la actualidad, a riesgo de aceptar (como «sublimación de la derrota») la existencia de territorios dicotomizados.